



Diputado DC descarta ocultamiento de desentierros en Mesa de Diálogo

“Mi impresión es que si las exhumaciones ilegales no estuvieron en el informe definitivo (de las FF.AA.), es porque esos oficiales que participaron en él no las conocían”.

Convencido de la honestidad de los oficiales de las Fuerzas Armadas que participaron en la Mesa de Diálogo, el diputado Jorge Burgos también valora la actitud que frente al tema de los derechos humanos han mantenido los dos últimos comandantes en Jefe del Ejército. De la misma manera, opina que la izquierda ya dio su paso en pro de asumir culpas en la violencia política, porque reconoció lo equivocado de opciones de cambio violento como las declaradas en los congresos de Chillán y La Serena de los años 60.

Así, según su evaluación, es a la derecha a la que resta aún hacer un *mea culpa* y admitir que no supo oponerse a hechos dolorosos como los que han quedado en evidencia con el tema de las exhumaciones ilegales que irrumpió en la palestra pública esta semana.

—El tema surgió como un dato real cuando hubo malos resultados en aquellos lugares indicados por el informe de la Mesa de Diálogo. Cuando yo estaba en el gobierno, no recuerdo haber contado con datos específicos. Ellos surgieron del trabajo de los jueces.

—¿Ud. es de los que considera que esas remociones obedecieron a una política institucional del Ejército?

—Sí. Leyendo la prensa uno se entera que hubo maquinaria pesada y apoyo aéreo para esas exhumaciones. Todo eso no significa sino que hubo respaldo logístico e institucional —me refiero a los mandos de aquella época y no a los de hoy— y eso se refuerza con el hecho de que esas exhumaciones se hicieron varios años después de las muertes. Se une a ello la suposición bastante lógica, por la cercanía de las fechas, de que el descubrimiento de los cuerpos en Lonquén atemorizó a quienes fueron inhumadores ilegales e hizo que decidieran realizar exhumaciones y lanzar cuerpos al mar.

—En la Subsecretaría de Interior, ¿cuánta información manejó sobre ello?

—Esos temas los manejaba el ministerio de Justicia o en la comisión de Derechos Humanos, con Alejandro González y Luciano Fouillioux. Como subsecretario, sólo nos correspondió apoyar con infraestructura a los jue-



ces que hacían las averiguaciones.

—¿Qué impacto cree que causará esto en el Ejército, enfrentado ahora a la acusación de haber institucionalizado el ocultamiento de hechos ilícitos?

—Por supuesto no es fácil para el Ejército este tipo de cosas, pero hay que ayudarlo a que vaya saliendo de este tema. Y esa colaboración pasa porque todos sepamos distinguir claramente lo que es el mando hoy, de lo que fue anteriormente. En definitiva, esto es un grave daño para quienes actuaron en esa época. Pero, claramente, hay que reconocer el esfuerzo de los generales Ricardo Izurieta y Juan Emilio Cheyre. No hay antecedente alguno para imputarle responsabilidades a los actuales conductores, del Ejército. Incluso —porque en mi calidad de

subsecretario conocí a muchos de quienes colaboraron con la Mesa de Diálogo en su última etapa— mi impresión es que si esas exhumaciones ilegales no estuvieron en el Informe definitivo, es porque esos oficiales no las conocían.

—Pamela Pereira argumenta que implícitamente ellos sí reconocieron las exhumaciones.

—Ella participó en la Mesa de Diálogo y tiene muchos antecedentes. Pero creo que ella alude a que un reconocimiento explícito tiene que ver con aceptar que hubo esta conducta ilegal y no necesariamente con dar cuenta de los lugares y episodios.

—¿Qué le parece la propuesta de la UDI?

“

“Los sectores más jóvenes de la UDI estarían dispuestos a un reconocimiento, pero su vieja guardia no”

”

—Es una propuesta hecha de buena fe, que tiene aportes interesantes para los hechos posteriores a marzo de 1990. Eso sí, algunas declaraciones que han acompañado esa propuesta me parecen poco felices, particularmente aquella que sostiene que somos todos responsables respecto de la violación sistemática de los derechos humanos.

—¿Está pendiente un reconocimiento de los hechos por parte de la derecha?

—No creo que haya que insistir en pedirlo, aunque si se diera, sería una gran contribución. Creo que los sectores más jóvenes de la UDI estarían dispuestos a ese reconocimiento, pero su vieja guardia no. Nadie les pide que soliciten perdón por actos violentos en que no participaron, sino un mea culpa respecto de cierta ceguera que hubo en un momento importante del país, de negar o justificar la existencia de hechos dolorosos. Les creo a ellos cuando dicen

que han comprobado lo dolorosos que son esos casos y le creo al senador Jaime Orpis cuando dice que está impactado del dolor de las familias. Pero eso a mi juicio no tiene un correlato en el documento que presentó la UDI. Y me atrevo a pensar que ha habido una división en ese partido, en ese tema.

Frente al dolor, hay que tener clara la causa, y ella está en que algunos civiles dieron sostén ideológico a una política de violación sistemática de derechos humanos. Eso debe ser reconocido como algo que estuvo mal, tal como los socialistas declararon que no puede ser que un PS haya establecido, en un momento de su historia, que la vía de las armas era una vía alternativa: ■